

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a resolver la apelación contra la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **JORGE AUGUSTO VALENCIA MURILLO** contra la sociedad **CASA DE FUNERALES LA LIBERTAD S.A.S.**¹ al cual se vinculó como tercero coadyuvante a la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A.), tramitado bajo el radicado único nacional No. **05001-31-05-005-2015-00848-01**.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos.

ANTECEDENTES:

El actor pretende con la presente demanda, se declare la existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido que inició el 10 de octubre de 2010 y culminó el 15 de junio de 2012 por despido sin justa causa, y como consecuencia de lo anterior, se condene al pago de los siguientes conceptos: indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa debidamente indexada, primas de servicio, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y subsidio de transporte correspondientes al tiempo laborado, aportes a pensión, riesgos profesionales y salud, horas extras efectivamente laboradas, indemnización del artículo 65 del CST, y la sanción por no consignación de la cesantía a un fondo proporcional de los años

¹La demanda fue dirigida también contra la señora LUISA FERNANDA DURANGO GÓMEZ como persona natural y propietaria del establecimiento de comercio FUNERARIA LA LIBERTAD y así fue incluida en el auto admisorio. Posteriormente, en auto del 4 de abril de 2019 se declaró la nulidad en relación con la admisión de la demanda contra esta persona; decisión que no fue recurrida por ninguna de las partes, continuándose el trámite del proceso con la CASA DE FUNERALES LA LIBERTAD SAS y PROTECCIÓN S.A.

2010 y 2011, desde la fecha de la consignación hasta que se haga efectiva la misma.

De manera subsidiaria, solicita se declare la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo por omisión en el reporte de aportes a seguridad social y parafiscales, y consecuente con ello, se condene al demandado a pagar los salarios y prestaciones debidos desde el 15 de junio de 2012, hasta la terminación correcta del contrato, cualquier otra condena ultra y extra petita y las costas del proceso.

Como fundamento factico de las pretensiones, expone el actor que se vinculó al servicio de la demandada a través de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, que inició el 10 de octubre de 2010 y culminó el 15 de junio de 2012, fecha en la cual fue despedido sin justa causa.

Afirma que se desempeñaba en el cargo de asesor comercial y recaudador de lunes a sábado en un horario diurno de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; devengando un salario mínimo más comisiones de \$400.000.

Narra que recibió un último pago el 15 de junio de 2012, manifestándosele que ya no laboraría más con la demandada, adeudándosele, para el momento del despido, primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y subsidio de transporte por el tiempo laborado, aportes en pensión, riesgos profesionales y salud y horas extras efectivamente laboradas.

Sostiene que luego del despido se acercó en varias ocasiones al empleador para el pago de lo adeudado, pero siempre recibió respuestas negativas.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia declaró que entre el señor JORGE AUGUSTO VALENCIA MURILLO y la CASA DE FUNERALES LA LIBERTAD S.A.S., existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 30 de octubre de 2010 y el 15 de junio de 2012, con una jornada de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., devengando un SMLMV. Condenó a la demandada a reconocer y pagar a favor del demandante el valor de los aportes al sistema pensional por el referido periodo, debiendo ser calculado y recaudado por la AFP PROTECCIÓN S.A. Declaró probada la excepción de prescripción formulada por el

curador *ad litem* de la sociedad demandada sobre las horas extras, prestaciones sociales, vacaciones, auxilios de transporte e indemnizaciones que se hubieren causado con ocasión de la relación laboral. Absolvió a la demandada de las demás pretensiones y la condenó en costas a favor del demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$438.801 equivalente a medio SMLMV.

Para arribar a la anterior decisión, el *a quo* señaló, que conforme los contratos preexequiales suscritos por el demandante en calidad de asesor, se infiere que la relación laboral inició, por lo menos, el 30 de octubre de 2010, encontrándose de las pruebas aportadas por PROTECCIÓN S.A., que fue afiliado a esta AFP el 2 de febrero de 2011 como trabajador dependiente de la CASA DE FUNERALES LA LIBERTAD S.A.S. y que el extremo final de la relación laboral fue el 15 de junio de 2012, al estar claro que a partir del 16 de junio, reporta como afiliado del empleador FUNERARIA LA ESPERANZA.

Señala el juez, que, valorando el interrogatorio de parte del demandante, si bien afirma haber empezado a laborar el 10 de octubre de 2010, esta afirmación que le favorece no puede ser tomada en cuenta por el Despacho. En cuanto a la fecha de terminación, incurre en confesión al admitir que fue el 15 de junio de 2012, en la medida que esta afirmación le perjudica respecto de la exigibilidad de los derechos que reclama, ya que, desde ese momento, empieza a contar el termino de prescripción de 3 años; confesando también que la reclamación verbal que hizo fue sobre los aportes a la seguridad social en pensiones.

Refiere que en la declaración de la testigo MARTA NELLY CÁRDENAS CIRO encuentra un verdadero interés en favorecer al demandante por cuanto ella adelanta una demanda con similares reclamos, y que no es creíble que el demandante empezó a laborar a principios de octubre de 2010 como lo dice, siendo su declaración general y abstracta respecto del trabajo extra o suplementario, aunque mereciendo credibilidad sobre la existencia de la relación laboral, las funciones que desempeñó el demandante, que devengaba el salario mínimo, y que el contrato terminó el 15 de junio de 2012.

En cuanto a la testigo, DORA MARÍA RODRÍGUEZ, indica que fue clara y sincera, sobre aspectos como la existencia del contrato de trabajo, las funciones que desempeñó el actor en los horarios por encima de la jornada máxima, sin precisar cuántas fueron las horas extras ni el trabajo dominical, y que el salario era del

mínimo más \$400.000 de comisiones, aunque al final de la relación laboral, fue el mínimo.

Expone que valorando de forma conjunta las pruebas, concluye la existencia de la relación laboral, enmarcada en un contrato de trabajo verbal a término indefinido, cuyos extremos laborales son desde el 30 de octubre de 2010 al 15 de junio de 2012, en jornada de lunes a sábado entre las 8 a.m. a 6 p.m., en la que el demandante se desempeñó como asesor comercial, vendedor, administrador, afiliador, y oficios varios.

Puntualizó el juez, que declaraba la prosperidad de la excepción de prescripción sobre horas extras, prestaciones sociales, vacaciones, auxilio de transporte, e indemnizaciones, que se hubiese causado con ocasión de la relación laboral, teniendo en cuenta que esta feneció el 15 de junio de 2012, y la demanda se radicó el 17 de junio de 2015, esto es, dos días después, de haberse vencido el término de 3 años a que hace referencia los art 488 del CST y 151 del CPTSS.

Acto seguido, indica que, en todo caso, es de reiterar la falta de especificidad y concreción sobre la prueba de la existencia de un horario suplementario o de horas extra, es decir en dominicales o exceso de la jornada máxima legal, siendo, por tanto, dos los argumentos, que llevan al Despacho a denegar el reconocimiento de horas extra y trabajo suplementario.

Agrega que la prescripción que se declara prospera por cuanto la demanda fue formulada por fuera del término establecido en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, y, además, por fuera del término establecido en el “artículo 90 del CGP” sobre la interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad, norma que se aplica a los juicios sociales en virtud del artículo 145 del CPTSS, lo cual sin embargo, no afecta los aportes al sistema general de pensiones, dado que son sumas destinadas al reconocimiento de una prestación vitalicia, derecho imprescriptible e irrenunciable.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada judicial del demandante apeló la sentencia por haberse declarado probada la excepción de prescripción, respecto de las prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones y horas extras que aduce el actor tener derecho,

argumentando que, si bien es cierto, la demanda se presentó un día posterior, no el 17 como señala el despacho, sino el 16, el día 15 no era día hábil, motivo por el cual, no habían prescrito los derechos que tiene en su favor el demandante.

DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a establecer si de configuró o no la prescripción de obligaciones laborales deprecadas por el demandante tales como prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones y horas extras, y, de no haber operado dicha prescripción, si hay lugar a condenar a la sociedad demandada por tales conceptos.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Sea lo primero señalar que el juez de primera instancia declaró que entre el señor JORGE AUGUSTO VALENCIA MURILLO, y la CASA DE FUNERALES LA LIBERTAD S. A. S., existió un contrato de trabajo verbal, a término indefinido, que se ejecutó entre el 30 de octubre del año 2010 y el 15 de junio de 2012, con una jornada de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y con un salario equivalente

al mínimo legal, decisión que no fue apelada y por tanto está fuera de discusión en esta instancia.

Respecto del tema de la prescripción de la acción para reclamar derechos laborales, la jurisprudencia de la SCL Corte Suprema de Justicia, ha precisado que ella se rige conforme las preceptivas de los artículos 488 del CST y 151 del CPT y la SS, cualquiera fuera el derecho laboral o de la seguridad social que se reclame, salvo en los casos que las normas legales expresamente tengan un término especial para determinado derecho.

Además, la jurisprudencia de la Corporación antes citada ha precisado, que la prescripción de los derechos se cuenta desde que los mismos se han hecho exigibles, que en el caso de derechos laborales no puede superar la culminación de la relación laboral, es decir que para reclamar cualquier derecho laboral el termino máximo para demandar es los tres años a que hacen mención los artículos 488 del CST y 151 del CPT.

Ahora, el artículo 488 del CST dispone: *“El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual”*.

En este caso, la parte actora podría solicitar el reconocimiento de los derechos laborales al menos, a partir del momento en que terminó su vínculo laboral, que, según quedó establecido por el juez de primer grado sin apelación de las partes, fue el 15 de junio de 2012.

Como se anotó, el reclamo escrito del trabajador interrumpe el término de prescripción conforme lo establece el artículo 489 del CST, sin embargo, en este caso, no está demostrado que después de la terminación del contrato de trabajo, el demandante hubiese efectuado alguna reclamación al empleador tendiente a obtener el pago de las obligaciones adeudadas. No habiendo prueba documental sobre el particular, el demandante al ser interrogado refiere llanamente que cuanto terminó la relación laboral le preguntó a la señora LUISA FERNANDA DURANGO por qué no le habían consignado a PROTECCIÓN S.A., sin especificar si aparte de esta inquietud, hizo algún otro tipo de reclamo más específico y formal sobre el pago de lo que se le debía.

Tampoco se obtiene ninguna certeza de las personas que concurrieron a rendir testimonio, señoras MARTA NELLY CARDENAS CIRO y DORA MARIA RODRIGUEZ BERRIO, pues de la primera se infiere que habiéndose terminado el contrato tanto del demandante como de los demás trabajadores, por causa de que la funeraria donde trabajaban, fue comprada por la “*Funeraria la Esperanza*” no elevaron ninguna reclamación directamente ante la demandada, sino que encausaron sus reclamos por intermedio y ayuda de esta nueva funeraria donde les dijeron que demandaran para reclamar sus derechos. Poco menos se extrae de las afirmaciones de la otra testigo, quien dice que salió de la funeraria antes que el demandante, y si bien afirma saber que el actor solicitó las prestaciones, no sabe en qué momento ni dónde, ni a quién.

Así las cosas, teniendo como fecha de terminación del contrato el 15 de junio de 2012, el término de tres años de que trata los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, fenecía el 15 de junio de 2015, por lo que mirado objetivamente la fecha en que fue presentada la demanda el 16 de junio de 2015 como consta en el sello de recibido (folio 21 del expediente digitalizado), el término de prescripción ya se encontraba cumplido.

A pesar de lo anterior hay que tener en cuenta que el día 15 de junio de 2015 fue festivo, por lo que el demandante no podía presentar la demanda en dicha data.

En razón a lo anterior, a juicio de la Sala, se debe aplicar el mismo criterio de lo que ocurre cuando los términos se vencen en época de vacancia judicial, y es así que el art. 62 del Código de Régimen Político y Municipal, establece:

“ART. 62.—En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

Por su parte el ARTÍCULO 121 del C de P.C., preceptúa lo siguiente:

“Términos de días, meses y años. En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho.

Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario.”

A su vez, el artículo 118 del CGP, dispone:

“Artículo 118. Cómputo de términos. El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir de su otorgamiento. En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.

El término que se conceda fuera de audiencia correrá a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concedió.

Si el término fuere común a varias partes comenzará a correr a partir del día siguiente al de la notificación a todas.

Cuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, éste se interrumpirá y comenzará correr a partir del día siguiente al de la notificación del auto que resuelva el recurso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras esté corriendo un término, no podrá ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo término o que requieran trámite urgente, previa consulta verbal del secretario con el juez, de la cual dejará constancia. En estos casos, el término se suspenderá y se reanudará a partir del día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera.

Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias decretados por autos que no estén pendientes de la decisión del recurso de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de la notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al de su fecha si fuera de cúmplase.

Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

“En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado.” (Negrita fuera de texto).

En ilación con lo anterior, el Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en Auto 2013-00013 de agosto 14 de 2013, SECCIÓN CUARTA, Radicado: 540012333000201300013 01, Referencia: 20011, Consejera Ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E), señaló:

“Sobre la suspensión del término de caducidad, la corporación se pronunció en auto del 28 de octubre de 2010, con ponencia del magistrado, Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, dentro del expediente radicado bajo el número 2009-00078, así:

“En tal orden, cuando se trate de contabilizar el término a partir del cual ocurre el fenómeno de la caducidad de la mentada acción, debe seguirse la regla del cómputo de meses, es decir, que en ella no se excluyen los días de interrupción de vacancia judicial o los que por cualquier otra causa el despacho se encuentre cerrado, por ejemplo la suspensión del servicio de administración de justicia, a

menos que el término se venza en uno de ellos, caso en el cual el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente...”.

Consecuente con lo anterior, ni el cese de actividades ni la vacancia judicial, interrumpen el término de caducidad para ejercer el medio de control, diferente es que el plazo expire cuando el despacho se encuentre cerrado, caso en el cual el término se prorroga hasta el primer día hábil siguiente.”

Así las cosas, como quiera que el término de prescripción en el presente caso, se expresa en años y no en días, se tiene que, al vencerse en un día festivo, el demandante tenía plazo para presentar la demanda hasta el primer día hábil siguiente, esto es hasta el 16 de junio de 2015, fecha en la cual, en efecto, se presentó la demanda, sin que hubiese estado vencido por tanto el término de prescripción.

Ahora bien, refirió el *a quo* que aparte de haberse formulado la demanda por fuera del término consagrado en los artículos 488 y 151 del CPT y la SS, también está por fuera del término establecido en el “artículo 90 del CGP” relativo a la interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad;

Cumple señalar que la interrupción del término de prescripción con la presentación de la demanda, opera, en atención a lo señalado en el artículo 94 del CGP – antes artículo 90 del CPC-, siempre que el auto admisorio de aquella se notifique al demandado dentro del año siguiente a la notificación de dicho auto. En este caso el auto admisorio se notificó por estados del 21 de agosto de 2015 (folio 43 del expediente digitalizado). Ante la imposibilidad de efectuar la notificación personal a la sociedad demandada luego del envío de las respectivas citaciones, en auto del 29 de enero de 2016, se ordenó el emplazamiento y nombramiento de curador ad litem, quien presentó la contestación de la demanda el 17 de febrero de 2016, según el sello de la oficina de apoyo judicial (folio 105 del expediente digitalizado); todo ello sin que transcurriera un año desde la admisión de la demanda, por lo que es claro que no se configuró la consecuencia adversa de la que trata las citadas normas.

De lo que viene de decirse, se concluye entonces que cuando se presentó la demanda, el término de prescripción de la acción de tres años contados desde la terminación del contrato no estaba vencido.

Ahora bien, ha de precisarse que la prescripción no corre igual para todas las prestaciones en tanto la fecha de exigibilidad difiere en unas y otras. Teniendo en cuenta que dicho termino se interrumpió con la presentación de la demanda, lo cual se hizo el último día del tercer año siguiente a la terminación del contrato, ha de declararse probada parcialmente probada la excepción de prescripción de aquellos derechos que se habían hecho exigibles antes de la terminación del contrato -15 de junio de 2012-, lo que afecta a las primas de servicios e intereses a las cesantías causadas en los años 2010 y 2011; no sucediendo lo mismo con lo que por estos mismos conceptos se causó en el año 2012, ni con las cesantías que se tornaron exigibles a partir de la finalización del nexo contractual, y de las vacaciones que tiene un término especial de prescripción de cuatro años.

En los anteriores términos se modificará la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de prescripción sobre las prestaciones sociales y vacaciones causadas con ocasión de la relación laboral, para en su lugar, declararla probada solo parcialmente, lo que lleva a modificar también la decisión de absolver a la demandada de estas obligaciones laborales, para en su lugar condenarla al pago de los valores que más adelante se indicarán.

En cuanto al salario base para la liquidación de las prestaciones de las que se no se impuso condena, por la sola prosperidad de la excepción de prescripción, ha de ser el mínimo legal mensual vigente, en tanto el *a quo* declaró que la remuneración era del SMLMV, - lo cual no fue objeto de apelación-, y en la parte considerativa señaló que denegaba el reconocimiento de horas extras y trabajo suplementario, no solo por la prosperidad de la prescripción, sino también por la falta de especificidad y concreción sobre la prueba de la existencia de un horario suplementario, de horas extra, dominicales o exceso de la jornada máxima legal, espectro que no fue apelado, pues la sentencia solo fue recurrida respecto de la decisión de la prescripción.

Puntualizado lo anterior y teniendo como base el SMLMV, el valor de las prestaciones adeudadas es como sigue:

Cesantías todo el tiempo laborado:

AÑO	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	DÍAS LABORADOS	VALOR ADEUDADO
2010	\$515.000	\$61.500	62	\$99.286

2011	\$535.600	\$63.600	360	\$599.200
2012	\$566.700	\$67.800	165	\$290.812
TOTAL				\$989.298

Intereses a las cesantías del año 2012:

AÑO	VALOR CESANTIA	VALOR INTERESES
2012	\$290.812	\$15.994
TOTAL		\$15.994

Prima de servicios año 2012:

AÑO	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	VALOR PRIMA
2012	\$566.700	\$67.800	165	\$290.812
TOTAL				\$290.812

Vacaciones: **\$462.017**

Auxilio de transporte junio 2012: **\$33.900**

En lo concerniente a la indemnización por despido injusto, no hay lugar a la misma, por cuanto el actor no probó el despido por parte del empleador, pues solo afirma en la demanda que recibió un último pago el 15 de junio de 2012, manifestándosele que ya no laboraría más con la demandada, pero sin existir prueba de ello, es decir del despido del trabajo en esta forma.

Por otra parte, dentro de las pretensiones de la demanda, se solicita el pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del CST y la sanción por la no consignación de cesantía proporcional del año 2010 y del año 2011 a un fondo; las cuales se entienden incluidas en la apelación del demandante, cuando reprocha el que se haya declarado probada la excepción de prescripción *“respecto a las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones y horas extras a que aduce el actor tener derecho...”*; sanciones estas frente a las cuales se impone el siguiente análisis:

En lo que atañe a la **indemnización moratoria del artículo 65 del CST**, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral ha precisado que su imposición no es automática sino que debe estudiar la presencia de buena o mala fe en el

impago, y es el caso que la mala fe debe ser estudiada a la luz de las pruebas que obren en el proceso sobre todo circunstancias que pudieran dar lugar a la declaración de la existencia de la relación de trabajo, es decir, si la misma se encontraba presente de bulto o pudiera existir una duda o circunstancias que pudiera hacer pensar fundadamente a la parte demandada que no estaba frente a la presencia de una relación laboral, por cuanto para su imposición resulta necesario auscultar la conducta asumida por el empleador en el no pago de los salarios y/o prestaciones sociales adeudadas al asalariado, ya que sólo cuando la actitud omisiva se encuentra revestida de mala fe, resulta procedente fulminar condena por dicho concepto, más no cuando tal incumplimiento obedece a razones atendibles y justificables de tal proceder.

Así, en sentencia SL11436-2016, la alta Corporación reiteró que:

“En cuanto a la manera como los juzgadores deben apreciar la conducta del empleador, de cara a la imposición de la sanción por mora y a la inexistencia de parámetros o reglas absolutos, esta Corporación en sentencia de la CSJ SL ,13 abr. 2005, rad. 24397, explicó: ... deben los jueces valorar ante todo la conducta asumida por el empleador que no satisface a la extinción del vínculo laboral las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse desde luego con los medios probatorios específicos del proceso que se examina...”, como lo dejó sentado en la sentencia del 15 de julio de 1994, radicación 6658. “Así, pues, en materia de la indemnización moratoria no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe. Sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro.”

Teniendo en cuenta lo anterior, ha de indicarse que de la prueba recabada en el proceso, no se avizora en el proceso justificación alguna para que la sociedad demandada no procediera con el pago de las prestaciones adeudadas. Valorada la prueba, lo que se advierte es que ni durante la relación laboral ni luego de su terminación, el empleador cumplió con el reconocimiento y pago de los emolumentos prestacionales, sin saberse la razón por la cual, la demandada se sustrajo de tal pago, y sin contarse así con elementos de los cuales se pueda establecer la buena fe del empleador. Ciertamente es que en este proceso la demandada estuvo representada por curador ad litem, y en esta medida no se conoció de manera directa la versión de los hechos desde la óptica del empleador, pero tal circunstancia por sí sola no es suficiente para justificar a la demandada por haberse sustraído del pago de lo adeudado, ni acredita situaciones que le hubieran imposibilitado pagar tales conceptos, máxime que los testimonios recabados por

cuenta del demandante, son claros al señalar que durante la relación laboral nunca se pagaron las prestaciones, lo que conlleva inexorablemente a la viabilidad de la sanción moratoria del artículo 65 del CST.

Ahora para imponer la referida sanción, en esta instancia no solo se consideró la prescripción, sino también el derecho a la misma, en atención a la ausencia de buena fe en el impago de las prestaciones sociales, lo que permite establecer también el salario que se debe tener en cuenta para liquidarla, por lo que, no se puede perder de vista, que el *a quo*, determinó que, conforme a los testimonios, el actor sí laboraba en horas extras, dominicales y festivos, pero que no se pudo producir condena por falta de concreción y precisión para liquidarlas, lo que conlleva a que el salario devengado por el actor en realidad fue superior al mínimo legal, que en este caso debe ser por efecto del tiempo suplementario laborado, de al menos un (1) peso adicional al referido SMLMV, del año 2012, es decir \$566.701, y atendiendo que la demanda fue presentada después de los dos años de que trata el ART. 65 del CST, la indemnización correspondiente a un día de salario, por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales, por los primeros dos años, es decir la suma de \$18.890,033 diarios, y a partir del día siguiente los intereses moratorios bancarios certificados por la Superintendencia Financiera, sobre lo adeudado por concepto de prestaciones sociales.

Cuantificada entonces la sanción por los dos primeros años, esto es desde el 16 de junio de 2012 hasta este mismo día y mes de año 2014, asciende a la suma de \$ 13.600.823,76

En cuanto a **la sanción por la no consignación de las cesantías**, debe decirse que el auxilio de cesantías regulado por los artículos 249 a 258 del CST y 98 y siguientes de la Ley 50 de 1990, es una prestación social que deben pagar el empleador al trabajador en los montos y plazos estipulados por la ley. En los contratos de trabajo a término indefinido, se causa por cada año de servicios prestados y es equivalente a un salario mensual.

El plazo para consignar las cesantías en el fondo elegido por el trabajador es hasta el 14 de febrero de cada anualidad, respecto de las cesantías de año anterior con corte a 31 de diciembre. Empero, cuando el contrato de trabajo termina por cualquier razón, las cesantías deben ser pagadas directamente al trabajador cuando se termine y liquide el contrato de trabajo.

Según el numeral 3 inciso único del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cuando el empleador incumpla el plazo señalado, deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Por ello, el órgano de cierre de esta jurisdicción ha determinado que la consecuencia de la norma es eminentemente sancionatoria por tener su origen en el incumplimiento de la obligación a cargo del empleador, en consecuencia, su imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del incumplido, por lo tanto, cuando el empleador no aporte razones satisfactorias y justificativas de su conducta, procede la imposición de la sanción. Al respecto, pueden verse entre otras, las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la CSJ SL15.507 de 2015, SL 47.048 de 2016. y SL 2833 de 2017, sin que se encuentre en este caso, por las mismas razones indicadas respecto de la indemnización del Art. 65 del CST, razones atendibles para que el empleador de actor, se haya sustraído de la consignación de las cesantías de los años 2010 y 2011

Dicho lo anterior, es de precisar que esta sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por cada anualidad de cesantías, se causa hasta cuando existe la obligación de consignar las del año siguiente, y en todo caso hasta la terminación del contrato de trabajo, pues a partir de este momento, la que se sigue generando es la indemnización consagrada en el artículo 65 del CST, sin que ambas puedan ser concurrentes.

Conforme lo anotado en precedencia, en el caso de autos, la sanción moratoria por la no consignación de cesantías, se encuentre prescrita, pues todas de hicieron exigibles al menos, al 15 de febrero de 2012, es decir en los tres años anteriores a la presentación de la demanda el 16 de junio de 2015.

Conforme a los argumentos fácticos, probatorios y de derecho expuestos en precedencia, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA Y MODIFICADA en los términos anteriormente expuestos.

Sin costas en esta instancia por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación de la parte demandante.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia apelada del 30 de julio de 2020 proferida por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor **JORGE AUGUSTO VALENCIA MURILLO** contra la sociedad **CASA DE FUNERALES LA LIBERTAD S.A.S.** en cuanto declaró probada la excepción de prescripción formulada por el curador ad litem de la demandada, sobre las prestaciones sociales, vacaciones y auxilios de transporte, para en su lugar, declarar probada tal excepción, solo parcialmente, respecto del derecho que por estos conceptos se hicieron exigibles antes del 15 de junio de 2012, en la forma explicada en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: CONDENAR a la CASA DE FUNERALES LA LIBERTAD S.A.S. a pagar al demandante las siguientes prestaciones:

- Por cesantías, la suma de \$989.298;
- Por intereses a las cesantías del año 2012 la suma de \$15.994;
- Por prima de servicios del año 2012 la suma de \$290.812;
- Por vacaciones la suma de \$462.017;
- Por auxilio de transporte de junio de 2012 \$33.900
- Por la sanción moratoria del artículo 65 del CST, la suma de \$ 13.600.823,76, y a partir del 17 de junio de 2014, los intereses moratorios bancarios certificados por la Superintendencia Financiera, sobre las prestaciones sociales que se codena a pagar en esta sentencia, hasta que se produzca su pago.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

La presente sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Vuelva el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma la providencia por quienes intervinieron en la decisión, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **92522ae05695341516cd72e1aa8362e18c7faecfadf225f8e17f887dda4ce243**

Documento generado en 01/12/2023 03:47:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>